



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

RADICADO: 11001-33-35-026-2020-00329-00
PROCESO: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: **JHON ALEXANDER RUEDA ORGANISTA**
DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
POLICÍA NACIONAL

En el presente asunto, el señor **JHON ALEXANDER RUEDA ORGANISTA** a través de apoderado judicial, promueve demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de la **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL**, con la finalidad de obtener la nulidad de la Resolución No. 047 del 31 de enero de 2020, por medio de la cual se dispuso el retiro del servicio activo de la Policía Nacional.

Conforme a lo anterior, y revisado el expediente, este despacho observa que no es posible avocar conocimiento de la demanda presentada, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

En primer lugar, se debe decir que el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala la oportunidad en la cual se deben presentar las demandas, refiriéndose en el numeral 2º, literal d), específicamente a las de nulidad y restablecimiento del derecho, preceptuando lo siguiente:

“ART. 164.- Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

(...)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(...)

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales.”

Sombreado fuera de texto

Visto esto, al analizar los términos en los cuales se instauró la presente demanda, se observa lo siguiente:

- Que mediante Resolución No. 0047 del 31 de enero de 2020, se dispuso el retiro del servicio activo de la Policía Nacional al Patrullero ® JHON ALEXANDER RUEDA ORGANISTA. (fls. 16 a 44 del expediente digital)
- Dicha resolución fue notificada por aviso al señor Rueda Organista, el día 28 de febrero de 2020. (fl. 47 expediente digital)

De acuerdo con lo antes manifestado, se tiene que la Resolución No. 0047 del 31 de enero de 2020, concluyó una actuación administrativa por parte de la Policía Nacional, quedando así agotado el trámite ante la entidad demandada, pues contra la misma no procedía recurso alguno, lo cual permitía que se pudiera acudir directamente ante la jurisdicción contencioso administrativo para controvertir la legalidad del acto administrativo a través del medio de control respectivo.

De conformidad con lo anterior, este Despacho Judicial a través de providencia de data 1° de diciembre de 2020, ordenó oficiar a la Procuraduría General de la Nación, para que indicara si con ocasión a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, debido a la pandemia del COVID -19, fueron suspendidos los términos para recibir solicitudes de conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo.

Con respuesta radicada al correo electrónico el día 16 de diciembre de 2020, la Procuraduría General de la Nación a través de la Asesora Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa Liliana García Moscote, indicó lo que, de conformidad con las directrices impartidas por el Procurador General de la Nación, los términos en materia de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo no fueron suspendidos con ocasión a la emergencia sanitaria por el Covid – 19.

Señaló que, a través de la Resolución 127 del 16 de marzo de 2020, se autorizó a los Agentes del Ministerio Público para celebrar audiencias de conciliación no presenciales a través de medios electrónicos, los cuales se han venido prorrogando durante los meses de pandemia.

Del mismo modo indica que, únicamente se suspendió el trámite de conciliaciones extrajudiciales, cuando el convocante estuviera en la imposibilidad de aportar pruebas, soportes o anexos; suspensión que estuvo vigente hasta el 30 de septiembre pasado.

En este orden de ideas, se tiene, que la notificación del acto acusado, esto es, la resolución No. 047 del 31 de enero de 2020, fue realizada por aviso el 28 de febrero pasado.

Que, contando a partir del día hábil siguiente a la notificación del acto acusado, es decir, el 2 de marzo de 2020, el accionante contaba con 4 meses para interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,

feneciendo tal término el 2 de julio de 2020, lo anterior, al tenor de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, numeral 2° literal d).

La solicitud de conciliación fue presentada el 10 de septiembre de 2020, y la realización de esta fue el 3 de noviembre del mismo año, es decir, **6 meses** después de haberse surtido la notificación del acto administrativo objeto de Litis.

Ahora bien, y en gracia de discusión, el Decreto 564 del 15 de abril de 2020, suspendió el término de prescripción y caducidad para presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los Tribunales arbitrales, disponiendo en su artículo 1° lo siguiente:

“Artículo 1. Suspensión términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días, meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 marzo 2020 hasta el día que Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación los términos judiciales.

El conteo de los términos prescripción y caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión términos judiciales ordenada por Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, el interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente.”

Sin embargo, al ser el objeto de la presente litis un asunto susceptible de agotamiento del requisito de procedibilidad debía el actor radicar oportunamente ante la Procuraduría General de la Nación, la respectiva solicitud de conciliación extrajudicial, y con ello interrumpir el término de caducidad del medio de control.

Lo anterior, habida consideración que, la Procuraduría General de la Nación no suspendió los términos para radicar solicitudes de conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo, teniendo en cuenta la información suministrada por la Asesora Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa Liliana García Moscote y los actos administrativos aportados con la contestación.

De la misma manera, no se evidenció en el plenario, alguna manifestación del apoderado judicial que le impidiera la radicación oportuna de la solicitud de conciliación extrajudicial; lo anterior, atendiendo lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo segundo de la Resolución No. 143 del 31 de marzo de 2020, que señaló:

“PARÁGRAFO 1: En los eventos en que el interesado en proponer una conciliación extrajudicial se encuentre en la imposibilidad de aportar pruebas, soportes o anexos tales como el poder para radicar conciliaciones hasta el día 30 de mayo de 2020, se dispone la suspensión del término de radicación de dichas solicitudes hasta esa fecha. En virtud del principio de buena fe, la simple manifestación de imposibilidad por parte del interesado en forma escrita al momento de radicar o en la audiencia de conciliación, será suficiente para tener por acreditada tal circunstancia”. Sombreado fuera de texto

Frente a lo anterior, es claro que en el presente asunto existe caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, desde el **2 de julio de 2020**.

En este sentido, el H. Consejo de Estado en providencia de 1º de diciembre de 2011, a través del Consejero Ponente, Dr. GERARDO ARENAS MONSALVE, dentro del expediente con radicación número 2010-00160, confirmó un auto a través del cual se rechazó la demanda, con base en los siguientes argumentos:

“2. Respecto a la caducidad en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

*Este fenómeno jurídico está fundamentado en la necesidad de señalar un plazo objetivo, **sin considerar situaciones personales**; es invariable para que aquella persona que considere que un acto administrativo vulnera un derecho, independientemente si ésta opta por demandar o no; no puede ser objeto de renuncia por la Administración, pues obra independientemente y aún contra voluntad del beneficiario de la acción; se constituye en aras de garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad de las situaciones que involucran a las autoridades administrativas.*

Al respecto, establece el numeral 2º del artículo 136 del C. C. A, subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, lo siguiente:

“La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.”

El artículo transcrito establece que la acción de nulidad y restablecimiento tiene un término de caducidad de cuatro meses contados a partir de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, dependiendo del caso. No obstante, este término no se aplica cuando se solicita la nulidad de un acto administrativo que reconoce prestaciones periódicas, ya que éstos pueden ser demandados en cualquier tiempo.

De igual manera, el Tribunal Administrativo de Antioquia, con auto adiado 24 de julio de 2013, dentro del expediente 05001-33-33-023-2013-00300, M.P. Beatriz Elena Jaramillo Muñoz, también confirmó una decisión de rechazo de la demanda por caducidad, en los términos que a continuación se señalan, siendo pertinentes los argumentos expuestos al respecto:

“Se puede decir también que la caducidad es un fenómeno procesal en virtud del cual por el sólo transcurso del tiempo, sin que se haya hecho uso de la acción judicial, se pierde para el administrado la posibilidad de demandar el acto administrativo en vía jurisdiccional, pues así lo precisó la Corte Constitucional: “La Ley establece un término para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas, de manera que al no promoverse la acción dentro del mismo, se produce la caducidad, ello surge a causa de la inactividad de los interesados para obtener por los medios judiciales requeridos la defensa y el reconocimiento de los daños antijurídicos imputables al Estado. Dichos plazos constituyen entonces una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del estado determinado derecho; por ende la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien dentro de las oportunidades procesales fijadas por la Ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado.”

En este orden de ideas, considera este despacho que se ha configurado la caducidad del medio de control, y corolario de ello, es del caso rechazar la demanda, pues la misma se presentó por fuera de la oportunidad procesal que tenía la parte demandante para el efecto, y en este evento el artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone en su numeral 1º que se rechazará la demanda “cuando hubiere operado la caducidad”.

En mérito de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO.- RECHAZAR POR CADUCIDAD la demanda interpuesta por el señor **JHON ALEXANDER RUEDA ORGANISTA**, en contra de la **NACIÓN – MINSITERIO DE DEFENSA NACIONLA – POLICÍA NACIONAL**, conforme lo manifestado en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. - Ejecutoriada la presente providencia, previas las anotaciones a que haya lugar, devuélvanse a la parte demandante los anexos sin necesidad de desglose y a través de la Oficina de Apoyo procédase al archivo correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

20



Firmado Por:

ANDRES JOSE QUINTERO GNECCO

JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 026 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTA-CUNDINAMARCA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **03dbc40e32db7bf2348ee1a3e077559c898138f350d513db35a71afeca7b7fc3**

Documento generado en 04/02/2021 01:06:10 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>